Jurisprudencia Contencioso-administrativa

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4.^a 15 de diciembre de 1976, de interés, por el contenido en el epígrafe VI del Tema III de la Unidad Didáctica 1.

Necesidad de probanza de la posesión y el despono, en el «interdictum propiuni» (Art. 55 del RBCL).

CDO.: Que son indudables las facultades municipales intervencionistas sobre la propiedad y actividad de los administrados, previstas en nuestro Ordenamiento Jurídico Local, especialmente la regulada en el artículo 404 de la Ley de Régimen Local (R. 1956, 74, 101 y N. Dicc. 611), y 55 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 27 mayo 1955 (R. 1956, 76 y N. Dicc. 2816), ya que como enseña y proclama una ya nutrida jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, *dada la naturaleza privilegiada y el carácter estrictamente posesorio de la facultad de recuperación administrativa que los citados preceptos conceden —facultad que en esencia constituye una auténtica acción interdictal actuada directamente por la propia autoridad de dichas Corporaciones—, es indudable que su ejercicio lícito viene subordinado a la real existencia de una prueba por la que se demuestre, en primer lugar, la posesión administrativa, sin perjuicio de la verdadera naturaleza de su titularidad comunal y, en segundo lugar, que tal uso público haya sido perturbado o usurpado por el administrado contra quien se dirige la acción municipal, recuperación factible y obligada «en cualquier momento», por así disponerlo el Reglamento Local, antes citado —sentencia, entre otras, las de 25 enero, 22 abril, 18 junio 1968 (R. 1117, 2235 y 3285), 20 y 29 marzo y 5 diciembre 1969 (R. 1713 y 1764), 27 enero y 4 julio 1970 (R. 230 y 3454), 14 marzo y 10 junio 1974 (R. 1365 y 2657)—.*

CDO.: Que los hechos relatados en el anterior considerando, acreditan la existencia de un camino, de utilización pública, que ha sido obstaculizado recientemente por el actor, con la instalación de dos portillas que impiden dicho uso, siendo así que como sanciona la jurisprudencia indicada de la Sala 4.^a del Tribunal Supremo, *la Ley de Régimen Local y el Reglamento de Bienes, conceden a las Corporaciones Locales, la facultad e incluso la obligación de hacer respetar la utilización y uso público de los caminos, con total independencia de su titularidad, pública o privada, cuestión a dilucidar ante los Tribunales Civiles Ordinarios, ajena no sólo a la competencia de los Ayuntamientos, sino también de esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ya que como enseña la sentencia de la*

Sala 4.ª del Tribunal Supremo de 22 abril 1968, los acuedos recurridos no implican definción de propiedad o negativa de derecho dominicales, sino que, contemplando un uso vecinal o utilización pública, se limitan a mantener el citado uso público, ejercitándose, en realidad, en afirmación de la sentencia de 5 diciembre 1969, una acción o potestad cuasi-interdictal, en ámbito estrictamente posesorio, pues entender dicha facultad administrativa de otro modo, implicaría —al decir de la sentencia de 29 marzo 1969—, minimizar la acción administrativa hasta el extremo de hacerla irrealizable, cual ocurriría si se hallase maniatada ante toda intervención justificativa de su procedente derecho de sus bienes, lo que indudablemente debe valorarse su mayor intensidad cuando debiesen de uso público se trata, facultad o potestad administrativa que solamente puede y debe ceder si la titularidad del administrado aparece objetivamente justificada —SS. de 27 enero y 30 noviembre 1970 (R. 230 y 4923), 17 enero y 29 abril 1972 (R. 850), 12 marzo y 4 abril 1973 (R. 1141 y 1831)—; recordando la sentencia de 10 junio 1974 que los caminos vecinales, aunque fueran simples sendas para peatones, estén sujetos a la posibilidad de su reivindicación en vía administrativa, al proclamar —con cita de resoluciones anteriores—, que estos caminos rurales de carácter rudimentario y carentes de firme que comunican pequeños núcleos urbanos o simples zonas de cultivo o aprovechamiento gozan de la aludida protección posesoria y subsiguiente recuperación administrativa; al haber dispuesto los acuerdos recurridos, el mantenimiento de una situación posesoria, de utilización pública de un vial, eludiendo, con exquisita prudencia todo pronunciamiento de titularidad, es obligado la desestimación del recurso contencioso, con total independencia de las acciones civiles que a los interesados incumba ejercitar ante la jurisdicción competente.